Año 2025 Nº 26

CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA • UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuario

Parlamento y Constitución

Dimensión y Manifestaciones Del Derecho Constitucional Al Juez Legal

Dimension And Manifestations From Constitutional Law To The Legal Judge

Álvaro Escobar Crespo
Profesor Ayudante Doctor de Derecho Procesal.
Universidad de Castilla-La Mancha.
alvaro.escobar@uclm.es
https://orcid.org/0009-0005-0430-4444

Cómo citar/Citation
ESCOBAR CRESPO, A.,
"Dimensión y manifestaciones del
derecho *constitucional* al juez legal",
Anuario Parlamento y Constitución, nº. 26, 2025.

https://doi.org/10.71206/rapc.406

Recibido: 31- 03-2025
Aceptado: 23-04-2025

Resumen: Se dedica este trabajo al análisis de las manifestaciones esenciales del derecho al juez legal, en cuanto concepto aglutinador de otra terminología que resultará más familiar, como la del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Para ello, partiremos de la finalidad esencial de este derecho, que no es otra que la independencia -neutralidad- judicial, la cual se consigue a través de la configuración de sendas dimensiones del derecho al juez legal; una negativa en cuanto excluyente, centrada en lo no permitido, y otra positiva, que se traduce de forma esencial en la obligada predeterminación.

Palabras clave: juez legal, independencia judicial, tribunales de excepción, predeterminación.

Abstract: This work is dedicated to the analysis of the essential manifestations of the right to a legal judge, as a unifying concept of other terminology that will be more familiar, such as the right to an ordinary judge predetermined by law. To do this, we will start from the essential purpose of this right, which is

none other than judicial independence -neutrality-, which is achieved through the configuration of two dimensions of the right to the legal judge; a negative as exclusive, focused on what is not permitted, and another positive, which essentially translates into the obligatory predetermination.

Keywords: legal judge, judicial independence, exceptional courts, predetermination.

SUMARIO

1.- Introducción.

2.- Dimensión negativa del derecho al juez legal: prohibición del juez excepcional.

3.- Dimensión positiva del derecho al juez legal: la predeterminación legal.

A) *Derecho a un órgano jurisdiccional y competente predeterminado en la ley.*

B) *El derecho a la predeterminación del juez o magistrado, como persona física e integrado en el órgano jurisdiccional competente.*

C) *Exclusión de la distribución de trabajo entre las salas o secciones de un mismo tribunal del contenido del derecho al juez legal predeterminado en la ley.*

4.- Breves consideraciones finales.

5.- Bibliografía.

1. Introducción.

Consideramos obligado comenzar este trabajo con la advertencia de que el "derecho al juez legal", como tal, no es un derecho expresamente recogido en nuestra Constitución; de ahí que empleemos la cursiva en el título, avisando de alguna manera que nos encontramos con, cuanto menos, una cierta peculiaridad conceptual. Es más, en ningún momento el legislador español postconstitucional ha utilizado la expresión "juez legal" para referirse al mencionado derecho. Esta circunstancia hace que la jurisprudencia relacionada con este derecho sea la fuente principal sobre la que pivotará nuestro trabajo. Efectivamente, para la delimitación del contenido del derecho al juez legal resulta absolutamente necesario el análisis de un importante número de resoluciones, especialmente, del Tribunal Constitucional, pues, aunque la cuestión haya sido tratada por la doctrina, estos autos y sentencias siguen siendo la fuente esencial para el estudio de este derecho. Con esto no pretendemos justificar el enfoque del trabajo, sino dotar de comprensión y aplaudir el conferido por la mayoría de las obras doctrinales, cuyo objeto de estudio está relacionado con el art. 24 CE[1].

Aunque, como veremos a lo largo de este artículo, el papel del legislador ha resultado, y sigue resultado fundamental en la configuración, desarrollo y extensión del derecho a la tutela judicial efectiva, es la jurisprudencia, principalmente la constitucional, la que, al albur de recursos de amparo o cuestiones de inconstitucionalidad, ha ido elaborando una amplia e importante doctrina referida al derecho al juez legal[2].

1 Nos referimos, a título de ejemplo, a: DE LA OLIVA SANTOS, A.: *Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional. La persona ante la Administración de Justicia: derechos básicos,* Bosch, Barcelona, 1980; GARBERÍ LLOBREGAT, J.: *El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Bosch, Barcelona, 2008; RUIZ-RICO RUIZ, G. Y CARAZO LIÉBANA, M. J., *El derecho a la tutela judicial efectiva. Análisis jurisprudencial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
Amparan nuestro enfoque reflexiones como la realizada por la Profesora DOIG DÍAZ, cuando nos recuerda que: "el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley sólo puede ser estudiado a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, que asumió la tarea de dotar de contenido a este derecho", recordando muy acertadamente la autora que este es el caso también del ordenamiento italiano, donde la jurisprudencia constitucional asumió el trabajo creativo de re-elaborar el concepto del derecho al juez legal. DOIG DÍAZ, Y., *Jurisdicción Militar y Estado de Derecho Garantías constitucionales y organización judicial,* Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003, pág. 133.

2 Sirva atender como dato ilustrativo, a las cifras extraídas de la memoria del TC del año 2022, última a la que se ha tenido acceso, y según la cual, el derecho al juez predeterminado por la ley fue invocado para sustentar 238 recursos de amparo durante el año de referencia. Memoria consultada en: https://www.tribunalconstitucional.es/es/memorias/Estadisticas/ESTADISTICAS-2022.pdf.

Efectivamente, el derecho al juez legal, en su dimensión positiva, se encuentra reconocido como derecho fundamental en el art. 24.2 CE[3], dotándolo, por tanto, de la protección jurídica privilegiada propia de un derecho de este rango[4]. Entre sus antecedentes normativos, encontramos el art. 247 de la Constitución de Cádiz de 1812 que establecía que "Ningún español podrá ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión, sino por el Tribunal competente determinado con anterioridad por la Ley"[5]. La anterioridad o predeterminación, como veremos posteriormente, se refiere tanto a la creación del órgano judicial, como a la atribución de jurisdicción y competencia al mismo.

Por su parte, el genérico derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el art. 24 CE no es un derecho de libertad, ejercitable directamente a partir de nuestra Constitución, sino un derecho de prestación ejercitable a partir de su configuración legal, configuración que no puede ser cualquiera, sino únicamente aquella que respete el contenido esencial del mismo y no permita injerencias ajenas al propio legislador. Efectivamente, como señalaba ya nuestro TC en 1985, el derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, el derecho al juez legal "sólo puede ejercitarse por los cauces que el legislador establece o, dicho de otro modo, es un derecho de configuración legal; pero ni el legislador podría poner cualquier obstáculo a tal derecho fundamental, pues ha de respetar siempre su contenido esencial (art. 53.1 de la CE), ni nadie que no sea el legislador puede crear impedimentos o limitaciones al derecho a la tutela judicial, cuyo ejercicio sólo por Ley puede regularse (art. 53.1 de la CE)[6]". Lo anterior ha sido considerado por algunos autores para concluir que no estamos ante un derecho de configuración legal en sentido estricto, pues, "existe un auténtico *deber constitucional de configuración*, que pesa sobre el legislador con la exigencia constitucional de un mínimo cuantitativo y

3 *Vid*. BURGOS-LADRON DE GUEVARA, J.: *El juez ordinario predeterminado por la ley*, Civitas, Madrid, 1990, págs. 31 y ss.

4 *Vid*. STS de 28 de noviembre de 2022 [ROJ: STS 4417/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4417].

5 En derecho comparado, se acepta comúnmente que el origen está en la Constitución francesa de 1791, en cuyo artículo 4 se disponía que "no se podrá atribuir a los ciudadanos un juez diferente al que la ley les haya asignado, por medio de comisión alguna, ni por medio de otras atribuciones o avocaciones que no estén legalmente determinadas". Al respecto, LORCA NAVARRETE, A., *El juez constitucional*, Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2021, págs. 40 y 41; Igualmente, RUIZ RUIZ, G., *El derecho al juez ordinario en la Constitución Española*, Civitas, Madrid, 1991, págs. 23 y 189.

6 En esos términos se expresa el Tribunal Constitucional en su STC de 30 de septiembre de 1985 [ROJ: STC 99/1985-ECLI:ES:TC:1985:99]. Debiendo llamarse la atención en cuanto que la doctrina contenida en esa STC ha sido confirmada recientemente en la STC de 6 de febrero de 2023 [ROJ: STC 1/2023 - ECLI:ES:TC:2023:1].

cualitativo de predeterminación legal*"*[7].

Con las anteriores precisiones, que ponen el énfasis en las dos dimensiones del derecho al juez legal (positiva, la primera y negativa, la segunda) y en su necesaria configuración legal, podemos extraer ya algunas consideraciones de las que partir a modo de premisas útiles para este trabajo: una primera se refiere a que el derecho al juez *legal* es, como no podría ser de otra manera, un derecho de configuración *legal* que no puede identificarse unívoca, única y exclusivamente con el derecho al juez predeterminado por la ley (dimensión positiva), pues dicha identificación dejaría al margen la, no menos importante, prohibición de tribunales excepción (dimensión negativa). Resultando, que ambas dimensiones son de obligada consideración y además perfectamente complementarias.

También podría decirse que la dimensión positiva es consecuencia de la dimensión negativa, y al revés, la dimensión negativa es consecuencia de la positiva. Incluso, podría decirse que la prohibición de los tribunales de excepción está ya contemplada en el derecho al juez ordinario predeterminado legalmente. En todo caso, y esto es lo verdaderamente decisivo, las dos dimensiones establecidas constitucionalmente reflejan la importancia del derecho al juez *legal* en el marco de la necesaria tutela judicial efectiva de los justiciables.

7 RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, J.: "El derecho al juez predeterminado por la ley", en *Derechos procesales fundamentales* de *Manuales de Formación Continuada* 22-2004 (GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI, F.; LÓPEZ LÓPEZ, E., Coord.), Consejo General del Poder Judicial, pág. 15. Este autor fundamenta su posición en la STC 47/1983, de 17 de junio, FJ 5.°, en la que, afirma que: "se viene a reconocer que las deficiencias legales en la predeterminación del Juez pueden vulnerar el derecho fundamental, con las siguientes palabras: "No basta, sin embargo, con que se respete el mecanismo previsto por la Ley para la designación de los titulares de los órganos colegiados. Es preciso que este mecanismo posea el grado de concreción necesario para asegurar la independencia e imparcialidad de los Tribunales que el derecho fundamental garantiza. Y en este sentido no cabe desconocer que la normativa actual, preconstitucional, no responde plenamente a dicha exigencia constitucional. Pero del grado de indeterminación existente en ella no se deriva forzosamente la lesión del derecho fundamental en cuestión, pues tal indeterminación, indebidamente contenida en las normas, puede reducirse por el que las aplica, utilizando criterios objetivos.".
Esto es recordado igualmente por MONTERO AROCA, J., en *Derecho Jurisdiccional I Parte General*, AAVV, 27ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 92, cuando afirma que: "En todo caso debe sostenerse que el derecho de las personas al juez predeterminado por la ley no es un derecho meramente de configuración legal (con libertad del legislador ordinario). No se tiene derecho a cualquier juez, siempre que éste esté predeterminado por la ley ordinaria; se tiene derecho al juez determinado por una regla general, regla que solo puede alterarse concurriendo criterios objetivamente razonables y también generales."
Vid. lo también suscrito en este sentido por GIMENO SENDRA, V., en *Introducción al Derecho Procesal*, 6ª ed., Uned, Madrid, 2010, pág. 103.

Igualmente, pudiéramos cuestionarnos si la ubicación separada de las dos dimensiones del derecho al juez legal, entre el art. 24 CE y el 117 CE, pudiera suponer alguna repercusión para su nivel de protección por la vía de amparo.

Y por último, atendiendo, precisamente, al necesario soporte legislativo del derecho al juez *legal*, el contenido del mismo no puede equipararse al dudoso contenido del denominado juez *natural*[8]. Lo anterior no prejuzga la influencia que haya podido tener la tesis del juez *natural* en la necesaria y condicionada configuración legal del juez predeterminado; por el contrario, podemos afirmar la identidad entre el derecho al juez legal y el derecho al juez ordinario (no excepcional[9]) predeterminado por la ley, previsto en el art. 24.2 CE, pero siempre que incluyamos su dimensión negativa, esto es, la interdicción de los tribunales de excepción[10].

2. Dimensión negativa del derecho al juez legal: prohibición del juez excepcional.

El derecho al juez legal lleva aparejadas tres exigencias o condiciones básicas, cuya vulneración podría tener consecuencias a la hora de poder llevar a cabo un control de constitucionalidad: 1ª) Que el órgano judicial haya sido creado con carácter previo al ejercicio de la acción por una norma; 2ª) Que dicha norma le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial; y 3ª) Que el régimen orgánico y procesal no permita calificar como especial o excepcional a dicho órgano judicial. Esta última exigencia, al margen de encontrarse implícitamente recogida

8 Poniendo énfasis en lo incierto del contenido del juez natural y en la imposibilidad de su identificación con el juez legal, vid. ESCALADA LÓPEZ, M.L.: Sobre el juez ordinario predeterminado por la ley, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007, pág. 119; DE DIEGO DÍEZ, L. A., *El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley*, Tecnos, 1998, pág. 82.

9 En este sentido, *vid*. STC 224/1993, de 1 de julio de 1993 (ROJ: STC 224/1993 - ECLI:ES:TC:1993:224): "por <<Juez ordinario>> ha venido entendiendo este Tribunal el que no es excepcional, pues la propia Constitución prohíbe los Tribunales de excepción en el art. 117.6".

10 El propio TC identificaba ambos términos, evidenciando la necesaria inclusión de la dimensión negativa en la STC 55/1990, de 28 de marzo (ROJ: STC 55/1990 - ECLI:ES:TC:1990:55): "El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley o al juez legal está en evidente relación con la prohibición constitucional de los tribunales de excepción y con la referencia a las normas de competencias contenidas en el art. 117.3 CE y exige normas generales y anteriores al hecho".

en el art. 24.2 CE, viene establecida expresamente en el art. 117.6 CE, mediante el que "se prohíben los tribunales de excepción", y es a la que nos referimos en este punto[11].

Antes de proseguir, consideramos de interés realizar la siguiente matización: precisamente, las características que deben concurrir para que un juez o tribunal no pueda considerarse excepcional y, por lo tanto, prohibido expresamente mediante el art. 117.6 CE, son, en su dimensión positiva, las que deben concurrir para que pueda ser considerado como ordinario en los términos establecidos en el art. 24.2 CE.

Entre la doctrina encontramos algunas definiciones más o menos precisas. Así, FERNÁNDEZ-ESPINAR, los define como "todos aquellos órganos jurisdiccionales que se hallasen fuera de la organización regular de la Judicatura y hubieren sido creados infringiendo todas aquellas reglas legales determinadoras de asignación de atribuciones y de competencia, con el fin de conocer de un supuesto particular e individualizado o de un grupo de ellos"[12]. Por su parte, ESCALADA LÓPEZ se refiere a ellos como "tribunales orgánicamente especiales constitucionalmente no previstos"[13]. RIZO GÓMEZ considera que, por tribunales de excepción, debemos considerar aquellos que han sido "configurados *ad hoc*, para dilucidar un caso concreto (*ratione materiae o personae*), y *ex post facto*"[14].

Pues bien, a efectos expositivos, hacemos nuestra la definición otorgada por GARBERÍ LLOBREGAT, cuando se refiere a tribunales de excepción como aquellos "órganos judiciales no ordinarios, no preestablecidos legalmente con carácter de generalidad o no provistos de las pertinentes reglas legales de predeterminación competencial[15]". Esta definición sigue la línea establecida ya

11 STS de 15 de febrero de 2022 (ROJ: STS 554/2022 - ECLI:ES:TS:2022:554).

12 FERNANDEZ-ESPINAR, G.: "La prevaricación judicial: de la teorización a su plasmación efectiva en la tipificación sustantiva", *Diario La Ley*, 1993, pág. 852, tomo 3.

13 ESCALADA LÓPEZ, M.L.: "Algunas reflexiones en torno a la jurisdicción militar", *Revista General de Derecho*, núm. 12, mayo 2007, Ref. Iustel §794490.

14 RIZO GÓMEZ, B.: "El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y la predeterminación de la competencia …", *op. cit.,* p. 2.

15 GARBERÍ LLOBREGAT, J.: "El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley", en *Jurisdicción y competencia penal*, MARTÍNEZ ARRIETA, A. (dir.), *Cuadernos de derecho judicial*, Nº. 6, 1996, (págs. 13-58), pág. 20: "Tales plurales exigencias que (…) no operan independientemente las unas de las otras sino que se complementan entre sí, pueden ser reconducidas a la siguiente: el derecho al "Juez legal", desde esta primera perspectiva, prohíbe la existencia de "Jueces ad hoc" o, si se quiere, de "tribunales de excepción"(art. 117.6 CE), es decir, órganos judiciales no ordinarios, no preestablecidos

por el TC en su Auto del 23 de julio de 1986, en el que, refiriéndose a los jueces *ad hoc* o de excepción considera que son aquellos jueces "no establecidos y previstos con carácter de generalidad con las pertinentes reglas de competencia", incluyendo, por tanto, también los jueces "ex post facto, no (establecidos) con anterioridad, no "predeterminado"[16]".

Lógicamente, no estamos ante una prohibición de un órgano judicial atendiendo a su denominación o nomenclatura, sino a sus características, siendo necesario para que puedan considerarse excepcionales aquellos jueces o tribunales *ex post facto*, *ad hoc* u ocasionales que su jurisdicción y competencia no estén predeterminadas mediante normas previas, generales y abstractas[17]. Lo anterior no ocurre cuando hablamos de tribunales "especializados" en materia penal o civil cuya jurisdicción y competencia esté predeterminada en los términos anteriormente señalados[18]. En puridad, como ya sostenía el TS (Militar) en su Sentencia de 18 de febrero de 1997, "esta categoría constitucionalmente imposible (*el tribunal de excepción*) sólo cuadra, en buena doctrina, al tribunal o juez <<ad hoc>>"[19].

En el anterior sentido, nuestro TC ha concretado que "el derecho fundamental de referencia "exige, en primer término, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional" (…). Asimismo, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal, la garantía recogida en el artículo 24.2 CE no supone el derecho a un juez determinado en concreto (…) y no excluye, en principio, la posibilidad de establecer reglas especiales de competencia en la distribución de los asuntos entre los distintos órganos judiciales. Así lo reconocimos cuando sostuvimos que "la atribución por Ley de competencia para conocer de un asunto a uno u otro órgano de la jurisdicción ordinaria, no lesiona los derechos fundamentales recogidos en el art. 24 de la Constitución (…), a diferencia de lo que, en cambio, ocurriría si se atribuyese irrazonada o irrazonablemente a una jurisdicción

legalmente con carácter de generalidad o no provistos de las pertinentes reglas legales de predeterminación competencial".

16 ATC 652/1986, de 23 de julio de 1986 [ROJ: ATC 652/1986 - ECLI:ES:TC:1986:652ª]. El contenido de este ATC, referido al concepto de juez de excepción, fue confirmado diez años después mediante el ATC 42/1996, de 14 de febrero de 1996 [ROJ: ATC 42/1996 - ECLI:ES:TC:1996:42ª].

17 STC 55/1990, de 28 de marzo [ROJ: STC 55/1990 - ECLI:ES:TC:1990:55].

18 Esto ha servido para que algunos, como FOSSAS ESPADALER se hayan manifestado en el sentido de no utilizar el calificativo de "especial" para referirse a un órgano "excepcional", *Legislador y derecho fundamental al juez legal*, Indret 2/2016, págs. 18-19

19 STS (sala 5ª) 18 de febrero 1997 [ROJ: STS 1111/1997 - ECLI:ES: TS:1997:1111].

especial (…); cabiendo incluso la atribución legal de la competencia a un órgano especializado o centralizado de la jurisdicción ordinaria, pero no por ello menos órgano judicial ordinario, como pueden ser la Audiencia Nacional o los Juzgados Centrales de Instrucción[20]".

Así, reafirmando una basta y consolidada doctrina, la STC de 23 de febrero de 2022 nos recuerda que "la anterioridad de tales criterios al caso a enjuiciar garantiza que una vez determinado en concreto el juez de un caso en virtud de la aplicación de las reglas competenciales establecidas en las leyes, no podrá ser desposeído de su conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órganos gubernativos"[21]. Por tanto, como algunos autores afirman, la desposesión señalada o la burda manipulación de esas reglas competenciales establecidas para la determinación del juez o tribunal competente, aún predeterminadas, también haría posible la calificación de esos como "excepcionales", pues ya no estaríamos ante el ordinario predeterminado por la ley[22]. Todo ello, como hemos anticipado en el caso de alguno de ellos, ha conducido a nuestro TC a no considerar como "tribunales de excepción" a los Juzgados Centrales de Instrucción[23], a la Audiencia Nacional[24], pese a su carácter preconstitucional y pese a que ha resultado y sigue resultando una cuestión controvertida[25], al Tribunal Militar Central[26], o a la Sala Especial del TS, considerada como un "pleno reducido del TS"[27], pues aunque puedan calificarse como especializados o centralizados, no dejan de ser órganos ordinarios.

20 STC 110/2017, de 5 de octubre de 2017 [ROJ: STC 110/2017 - ECLI:ES:TC:2017:110].

21 STC 25/2022, de 23 de febrero de 2022 [ROJ: STC 25/2022 - ECLI:ES:TC:2022:25].

22 Entre otros, *vid*. GIMENO SENDRA, V.: *Introducción al Derecho Procesal*, 8ª ed, Colex, 2013, pág. 103. RIZO GÓMEZ, B.: "El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y la predeterminación de la competencia. Principios que deben inspirar toda reforma competencial del sistema judicial español", *Diario La Ley*, Nº 8372, Sección Doctrina, 8 de Septiembre de 2014, Año XXXV, Ref. D-271.

23 STC 199/1987, de 16 de diciembre de 1987 [ROJ: STC 199/1987 - ECLI:ES:TC:1987:199].

24 STC 56/1990, de 29 de marzo de 1990 [ROJ: STC 56/1990 - ECLI:ES:TC:1990:56].

25 *Vid*., por ejemplo, lo afirmado por ASENCIO MELLADO, J. M.: *La Audiencia Nacional. Una visión crítica*, Fundación Alternativas, 29-2003, págs. 10-12, entre lo que destaca por su rotundidad: "Puede afirmarse, sin especiales reservas, que la AN encubre, cada vez con mayor nitidez, un Tribunal excepcional, por más que goce de predeterminación legal y que sus integrantes sean orgánicamente ordinarios".

26 STC 204/1994, de 11 de julio de 1994 [ROJ: STC 204/1994 - ECLI:ES:TC:1994:204].

27 STC 48/2003, de 12 de marzo de 2003 [ROJ: STC 48/2003 - ECLI:ES:TC:2003:48]: "Se trata de un órgano judicial ya existente al que, por medio de la correspondiente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le ha dotado de esa nueva competencia, con carácter general y para el futuro. Se cumplen, pues, todas las condiciones para dar por suficientemente respetada la garantía del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, pues ya "desde nuestra STC 47/1983, de 31 de mayo, FJ 2 , venimos reiterando que el mencionado derecho constitucional exige, en primer término, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, además que ésta le haya investido de jurisdicción y de competencia con anterioridad al hecho o actuación determinantes del proceso y, finalmente, que su

En definitiva, la prohibición de jueces excepcionales, que no de jueces especiales, no tiene otra finalidad que la de garantizar la independencia e imparcialidad de los mismos, mediante la exigencia de la predeterminación normativa previa de la jurisdicción y de la competencia, que incluya normas generales y abstractas y que, a su vez, sean respetadas, pues su vulneración haría quebrar su carácter ordinario. Como veremos posteriormente, junto a la investidura de jurisdicción y competencia previa, son la generalidad, la abstracción y la claridad de los criterios legales de atribución competencial las que garantizan la inexistencia de *jueces de excepción.*

3.- Dimensión positiva del derecho al juez legal: la predeterminación legal.

A) Derecho a un órgano jurisdiccional y competente predeterminado en la ley.

Como ya venimos señalando, la predeterminación es el condicionante principal del derecho al juez legal y, a su vez, es el instrumento cardinal para alcanzar la independencia que demanda el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva[28]**.** Dicha predeterminación se refiere, tanto al órgano judicial, como al juez, aunque, como veremos a continuación, la extensión del derecho no se proyecta de la misma manera. Así, haciendo nuestra la diferenciación establecida en la STS de 28 de noviembre de 2022, puede hablarse del derecho previsto en el art. 24.2 en las dos siguientes manifestaciones: 1ª) En su manifestación "de órgano jurisdiccional y competente predeterminado en la ley"; y 2ª) En su manifestación "de la predeterminación del juez o magistrado que, como persona física, se integra en el órgano jurisdiccional competente". Por tanto, a priori, quedaría fuera de dicho derecho "el reparto o distribución de trabajo *entre* las salas o secciones de un mismo tribunal".

Según algunos autores, la creación previa del órgano jurisdiccional y del Juez-persona estaría relacionada con el carácter "ordinario" del juez y la atribución

régimen orgánico y procesal no permita calificarle de órgano especial o excepcional" (STC 120/2001, de 4 de junio, FJ 2)".

28 *Vid*. JUAN SÁNCHEZ, R.: "La LO 7/2015: el Juez legal predeterminado, la gestión de los tribunales y su incidencia sobre el acceso a la justicia. ¿La implantación encubierta de los Tribunales Provinciales de Instancia?", *Diario La Ley*, Nº 8656, Sección Doctrina, 1 de Diciembre de 2015, Ref. D-451, LA LEY 6763/2015, pág. 2: "El principio del juez legal ordinario predeterminado es instrumental de la independencia judicial constitucionalmente proclamada y ningún sistema de justicia será más bueno, por más rápido que sea, por ejemplo, si no se garantiza la independencia de sus jueces".

normativa de la competencia y el reparto estarían relacionadas con el carácter "predeterminado" por la ley[29]. En todo caso, en la actualidad y lo consideremos relacionado con uno u otro carácter, esas son las manifestaciones admitidas.

Pues bien, con relación a la primera de las manifestaciones señaladas, esto es, la del derecho a ser juzgado por un órgano jurisdiccional y competente predeterminado por la ley, el TC, en su sentencia del 6 de julio de 2015 establecía que "[...] el derecho fundamental de referencia exige, en primer término, que el órgano judicial haya sido creado previamente por la norma jurídica, que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador de la actuación o proceso judicial[30]". Esto, junto al establecimiento de un régimen orgánico y procesal que no permita arbitrariedades, ni injerencias externas, conlleva, como ya señalábamos en el apartado anterior, que podamos hablar de un juez ordinario y no de un juez excepcional.

Igualmente y estrechamente relacionado con lo anterior, el TC, en su sentencia del 23 de febrero de 2022[31] nos recuerda que "La generalidad y la abstracción de los criterios legales de atribución competencial garantiza la inexistencia de jueces *ad hoc*; la anterioridad de tales criterios al caso a enjuiciar garantiza que una vez determinado en concreto el juez de un caso en virtud de la aplicación de las reglas competenciales establecidas en las leyes, no podrá ser desposeído de su conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órganos gubernativos".

Efectivamente, la anterioridad, la generalidad y la abstracción de los criterios de atribución de la jurisdicción y competencia se consideran esenciales para garantizar el derecho al juez legal e independiente. A estas características se les debe unir otras, como la objetividad y la taxatividad o precisión. La precisión o taxatividad requieren que las normas procesales deban ser lo suficientemente claras como para permitir al justiciable un previo conocimiento del órgano (legal) que podrá conocer de su causa[32]. De lo contrario, es decir, si la norma adoleciese de falta de claridad, no podría hablarse, precisamente, de "predeterminación", pues, indirecta e indeseadamente, podría atribuir a órganos, sean de la naturaleza que sea (política o judicial), facultades discrecionales de designación o composición del órgano judicial competente. Esto debe considerarse contrario

29 SAAVEDRA GALLO, P.: "El derecho al juez natural", en *Nuevos horizontes del derecho procesal. Libro-homenaje al Prof. Ernesto Pedraz Penalva*, JIMENO BULNES, M.; PÉREZ GIL, J. (coords.), Bosch, Barcelona, 2016, págs. 175 y176.

30 STC 152/2015, de 6 de julio de 2015 [ROJ: STC 152/2015 - ECLI:ES:TC:2015:152].

31 STC 25/2022, de 23 de febrero de 2022 [ROJ: STC 25/2022 - ECLI:ES:TC:2022:25].

32 FOSSAS ESPADALER, E.: *Legislador y derecho fundamental al juez legal*, Indret 2/2016, pp. 23 ss.

al art. 24.2 CE. Como algunos autores afirman los criterios pueden ser amplios o estrictos, "pero no vagos o difusos de determinación competencial cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita saber cuál es el juez ordinario llamado a conocer el caso[33]". Efectivamente, el derecho al juez legal no requiere el establecimiento de un método que simplifique el proceso de asignación del órgano judicial competente hasta el punto de requerir, únicamente, de una ejecución autómata de la ley, pero tampoco permite el establecimiento de unos criterios tan imprecisos que, ni tan siquiera, pueda hablarse de predeterminación.

A modo de síntesis, a diferencia de la anterioridad o carácter previo de la norma, que encuentra su fundamento en la necesidad de evitar injerencias del poder ejecutivo que la modifiquen y, por tanto, que desposean a un juez del conocimiento de lo inicialmente atribuido, la generalidad, la abstracción y la taxatividad de la norma tienen tiene como finalidad que en la asignación no puedan aparecer jueces excepcionales o *ad hoc*.

Desde los primeros pronunciamientos del TC, se incluyó esta manifestación del derecho al juez predeterminado por la ley establecido en el art. 24.2 CE. Poco más hay que añadir, pues, efectivamente, no admite duda alguna este alcance del derecho al juez legal. Cosa distinta ha ocurrido con la manifestación que será objeto de estudio en el apartado siguiente, pues ha requerido de algunas concreciones. Anticipando algo, una de las cuestiones que trataremos se refiere al distinto grado de taxatividad o precisión que requiere la predeterminación del juez-persona.

B) El derecho a la predeterminación del juez o magistrado, como persona física e integrado en el órgano jurisdiccional competente.

La cuestión que ahora planteamos, distinta al supuesto del "juez-órgano", que será tratada en el epígrafe siguiente, consiste en determinar si el derecho al juez legal contiene una vertiente subjetiva y, por tanto, comprende el derecho al juez-persona, entendiendo este último como el titular de la jurisdicción integrado en el órgano judicial competente[34].

33 En este sentido, *vid*. BURGOS-LADRON DE GUEVARA, JUAN: *El juez ordinario predeterminado por la ley*, op. cit., p. 25.

34 Refiriéndose a esta vertiente subjetiva, *vid*. SÁNCHEZ YLLERA, I: «Derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley», en *Comentarios a la Constitución española* (GÓMEZ DE LA ESCALERA C.R; CASAS BAAMONDE M.E.; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M -dirs.-), Wolters Kluwer, Madrid, 2008, págs. 636 y ss.

Y es que la predeterminación legal del juez-persona y la predeterminación legal del órgano judicial (incluidas las secciones y las salas), no pueden equipararse, básicamente, por dos motivos: el primero se refiere a las posibles contingencias personales que pueden padecer los titulares de los órganos judiciales; y el segundo, estrechamente relacionado con el primero, se refiere a la necesaria adopción, con base en el interés público, de medidas de reorganización judicial y necesidades del servicio. Por tanto, como afirma el TC, "no cabe exigir el mismo grado de fijeza y predeterminación al órgano que a sus titulares" (ATC 42/1996, de 14 de febrero[35]). Ahora bien, como es lógico y como concluiremos posteriormente, esas "necesidades del servicio" no justifican la realización de designaciones irregulares, entendiendo como tales aquellas que supongan alteraciones arbitrarias que no garanticen la independencia e imparcialidad del juez o jueces designados.

La cuestión, por tanto, radica en analizar si el derecho al juez legal puede ser alegado por el modo en que ha sido designado el juez o magistrado concreto que, finalmente, ha dictado la resolución[36].

Pues bien, nuestro TC ha zanjado cualquier posible duda sobre la inclusión del derecho al juez-persona en el derecho al juez legal. Y ya en su Auto 42/1996, de 14 de febrero, afirmaba "que el derecho del art. 24.2 CE (…) <<exige también que la composición del órgano judicial venga determinada por Ley y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de los miembros que han de constituir el órgano correspondiente. De esta forma se trata de garantizar la independencia e imparcialidad que el derecho en cuestión comporta..., garantía que quedaría burlada si bastase con mantener el

35 ATC 42/1996, de 14 de febrero de 1996 (ROJ: ATC 42/1996 - ECLI:ES:TC:1996:42A). Que consideramos de importancia capital en la configuración del derecho comentado, tal y como se comprobará con las alusiones que haremos al mismo en los diversos aspectos a los que se refiere. Del mismo fueron autores GIMENO SENDRA, V., JIMÉNEZ DE PARGA Y CABRERA, M. y DELGADO BARRIO, J. Confirmación de lo establecido en ATC 26/2018, de 20 de marzo de 2018 (ROJ: ATC 26/2018 - ECLI:ES:TC:2018:26A).

36 A este respecto, resulta obligado atender al propio tenor de la Exposición de Motivos de la LEC, cuando afirma que: "Es claro, en efecto, que el reparto acaba determinando «el juez ordinario» que conocerá de cada asunto. Y si bien se ha considerado constitucionalmente admisible que esa última determinación no haya de llevarse a cabo por inmediata aplicación de una norma con rango formal de ley, no sería aceptable, en buena lógica y técnica jurídica, que una sanción gubernativa fuera la única consecuencia de la inaplicación o de la infracción de las normas no legales determinantes de que conozca un «juez ordinario», en vez de otro. Difícilmente podría justificarse la coexistencia de esa sanción gubernativa, que reconocería la infracción de lo que ha de predeterminar al «juez ordinario», y la ausencia de efectos procesales para quienes tienen derecho a que su caso sea resuelto por el tribunal que corresponda según normas predeterminadas."

órgano y pudieran alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse>"[37].

Recientemente, el TC ha confirmado esta doctrina reiterando que "La garantía no sería eficaz si bastase con determinar legalmente el órgano judicial, pero pudieran designarse o alterarse arbitrariamente sus componentes, que son quienes, en definitiva, van a ejercitar sus facultades intelectuales y volitivas en las decisiones que hayan de adoptarse. A través de ambas exigencias, que son fuente objetiva de legitimación de la función judicial, se trata de garantizar la independencia e imparcialidad de los órganos judiciales"[38].

Antes de continuar, debemos apuntar algunos de los factores que inciden en la organización del trabajo de nuestros jueces y magistrados, y que pueden afectar de manera directa o colateral a la designación final del juez-persona. Siguiendo a JUAN SÁNCHEZ, junto a los propios factores fácticos señalados anteriormente, contingencias personales y necesidades del servicio, encontramos unos condicionantes de dimensión legal e, incluso, constitucional: "a) la rigidez de los principios orgánicos sobre el poder judicial como poder político (predeterminación e inamovilidad, principalmente; b) la relevancia de los órganos unipersonales en la estructura organizativa de la justicia; c) la distribución de las competencias entre Gobierno, CGPJ y CC.AA.; d) una estructura de gobierno autónomo altamente jerarquizada y burocrática; e) la multiplicidad de órganos gubernativos internos con atribuciones sobre la materia; f) la posibilidad de

37 ATC 42/1996, de 14 de febrero de 1996 [ROJ: ATC 42/1996 - ECLI:ES:TC:1996:42ª]. La doctrina establecida en dicho auto se ha confirmado posteriormente en, por ejemplo, la STC 152/2015, de 6 de julio de 2015 [ROJ: STC 152/2015 - ECLI:ES:TC:2015:152].

38 STC 106/2021, de 11 de mayo de 2021 [ROJ: STC 106/2021 - ECLI:ES:TC:2021:106].
Para un supuesto particular en el que la parte recurrente alegaba vulneración al derecho al juez legal, por cuanto se había modificado la composición de los miembros de la sala que estaba enjuiciando un procedimiento penal, con motivo de la jubilación de uno de sus miembros, resulta procedente traer a colación, pese a dictarse por la sala de lo contencioso administrativo, a la STS del 12 de febrero de 2002, rec. nº. 463/1999, (sala de lo contencioso administrativo), cuando con cita incluida de otra del TC, se dice que: "Esa exigencia constitucional no se extiende, pues, a garantizar un juez concreto (como ha señalado la STC 97/1987, de 10 de junio [RTC 1987, 97]), y, consiguientemente, no impide que pueda variar uno de los componentes del tribunal .Y de todo ello se deriva que no pueda compartirse la tesis preconizada por la parte recurrente de que el art. 24 CE (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) exige invariablemente que el juicio, una vez iniciado, haya de ser uno y definitivo, e impide de manera absoluta tanto su interrupción como la posibilidad, en determinadas circunstancias, de que sea reanudado con la variación de alguno de los componentes del tribunal ; y también resulta de lo anterior que esa denegación de prórroga jurisdiccional que es aquí objeto de polémica, al haber sido consecuencia de lo legalmente establecido, cumple con esas notas de objetividad y generalidad que configuran el perfil de ese derecho al juez predeterminado por la ley."

la recusación y abstención de los jueces y magistrados; g) en consecuencia, la previsión de un complejo régimen de sustituciones —más aún con un alto número de juzgados unipersonales—"[39].

Como señala el mencionado JUAN SÁNCHEZ en la misma obra abajo citada, la propia LOPJ prevé la posibilidad de que concurran esas contingencias personales, así como de las necesidades del servicio, y, en consecuencia, establece distintas posibilidades que dotan o debería dotar de cierta flexibilidad al régimen de elección del juez-persona: "Limitándonos también a una mera enumeración de los mismos, se pueden citar: a) la especialización de juzgados de una misma sede judicial a través del art. 98 LOPJ[40]; b) la existencia de jueces volantes, los llamados jueces de adscripción territorial creados por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, que introdujo el art. 347 bis LOPJ; b) las prórrogas de jurisdicción (art. 212 LOPJ); c) las comisiones de servicio por razones de apoyo o refuerzo judicial (arts. 216 bis y ss.); c) los jueces sustitutitos y magistrados suplentes (arts. 231 LOPJ); d) la posibilidad de eximir a un órgano jurisdiccional del reparto de asunto (art. 167 LOPJ); e) todo lo relativo al régimen de licencias y permisos regulado en la propia LOPJ; entre otras". Junto a la flexibilización del sistema, el otro fundamento de algunas de estas medidas no es otro que el de su eficiencia.

En todo caso, insistimos en que esa disminución del grado de fijeza y predeterminación (la taxatividad antes aludida), no excluye "la necesidad de que exista y se respete en cada caso un procedimiento objetivo y "legalmente establecido" para la designación de quienes hayan de constituir el órgano judicial (todo ello con el fin de proscribir la categoría de los "Jueces ad hoc "), hasta el

39 JUAN SÁNCHEZ, R.: "La LO 7/2015: el Juez legal predeterminado, la gestión de los tribunales y su incidencia sobre el acceso a la justicia. ¿La implantación encubierta de los Tribunales Provinciales de Instancia?", *Diario La Ley*, Nº 8656, Sección Doctrina, 1 de Diciembre de 2015, Ref. D-451, LA LEY 6763/2015.

40 Según algunos, el art. 98.1 LOPJ permitía algo que, de concretarse, supone una infracción del derecho al juez legal. En este sentido, en su redacción original el art. 98.1 LOPJ establecía: «98.1 de la LOPJ de 1985: «El Consejo General del Poder judicial podrá acordar, previo informe de la Sala de Gobierno, a propuesta, en su caso, de la junta de jueces, que en aquellas circunscripciones en que exista más de un juzgado de la misma clase, uno o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas clases de asuntos propios del orden jurisdiccional de que se trate». Atendiendo a dicho contenido, por ejemplo, BURGOS-LADRÓN DE GUEVARA, JUAN: *El juez ordinario predeterminado por la ley*, op. cit, p. 25, afirmaba: «Esto, si bien mantiene la línea de especialización dentro de un mismo orden jurisdiccional; implica la vulneración del principio del juez ordinario o legal, porque si el Consejo General del Poder judicial puede disponer que, con carácter estable, unos juzgados de cualquier orden jurisdiccional sólo conozcan de ciertas materias, dicho órgano de Gobierno está creando unos jueces especiales, infringiendo así el artículo 24.2 de la Constitución».

punto de que una eventual irregularidad en el mismo puede ocasionar la lesión del art. 24.2 CE"[41].

Por último, respecto de cuándo la mencionada irregularidad puede resultar lesiva del derecho al juez legal, el TC ha concretado, en una de sus sentencias referidas al "proceso independentista catalán", que eso debe entenderse así "si supone una alteración arbitraria de la composición del órgano judicial susceptible de afectar a su imagen de imparcialidad e independencia, pues, como señalamos en las SSTC 238/1998, de 15 de diciembre, FJ 5, y 162/2000, de 12 de junio, FJ 2, "es preciso no olvidar que esta garantía respecto de las personas físicas que encarnan el Tribunal llamado a juzgar la causa o litigio, no vela por la pureza de los procedimientos gubernativos seguidos en la designación. Su finalidad es más modesta, y más importante: asegurar la independencia y la imparcialidad de los jueces que forman la Sala de justicia, evitando que se mantenga el Tribunal, pero se alteren arbitrariamente sus componentes"[42]".

Por consiguiente, el art. 24.2 CE garantiza que el juez o magistrado al que le corresponda el conocimiento de un asunto no sea sustituido arbitrariamente, mediante la manipulación de las normas de organización y reparto de los órganos. Dicha manipulación y la consiguiente sustitución chocan frontalmente con los principios de independencia e imparcialidad del tribunal. Esta inclusión del derecho al juez-persona en el derecho al juez legal y no en el derecho al juez imparcial, propio del derecho a un proceso con todas las garantías tiene importantes consecuencias, pues bastaría demostrar la arbitraria manipulación de las normas del reparto para considerar lesionado el derecho al juez legal, sin necesidad de acreditar que el perjudicado por la imparcialidad ha obrado de manera especialmente diligente, ni de probar la concurrencia de la causa o causas de imparcialidad[43].

En definitiva, el derecho al juez legal impide que la designación del juez-persona, bajo el paraguas de cualquier necesidad organizativa, responda a criterios arbitrarios y que, de otro lado, sea el justiciable el que pueda elegir

41 STC 69/2001, de 17 de marzo de 2001 (ROJ: STC 69/2001 - ECLI:ES:TC:2001:69), haciendo suyos los razonamientos del ATC 42/1996, de 14 de febrero de 1996 (ROJ: ATC 42/1996 - ECLI:ES:TC:1996:42A).

42 STC 25/2022, de 23 de febrero de 2022 [ROJ: STC 25/2022 - ECLI:ES:TC:2022:25].

43 *Vid*. RUIZ RUIZ, G., *El derecho al juez ordinario en la Constitución Española*, Civitas, Madrid, 1991 pág. 162.

al juez-persona, porque lo considere el más adecuado para sus intereses[44]. Otra cosa, como indicaremos posteriormente, es que pueda elegir el foro de forma convencional, pero nunca el juez-persona concreto, atendiendo a su beneficio.

A modo de "subapartado" en la casuística relacionada con el derecho al juez legal como juez-persona, nos podemos encontrar el supuesto de las posibles infracciones cometidas por el incumplimiento del deber de comunicación a las partes sobre la composición de una sala o sección de un tribunal. A este respecto hay que dejar constancia de una llamativa divergencia en la jurisprudencia entre nuestros más altos Tribunales, y así, mientras que el TC ha mantenido que el incumplimiento de este deber no significa obligatoriamente la vulneración del derecho fundamental, el TS ha mostrado diferentes criterios a lo largo del tiempo.

Y así, como ejemplo de la doctrina mostrada al respecto por el Tribunal Constitucional, podemos destacar la STC del 6 de junio de 2016[45], ratificando lo ya señalado por el mismo tribunal en la del 15 de enero de 2001[46], en un asunto en el que, como decimos, no se había notificado el cambio en la composición del tribunal, estableciendo que: "Desde la óptica que se plantea la queja, es decir, la garantía del Juez imparcial vinculada con el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 CE) y a la luz de la doctrina reseñada, esos cambios no comunicados podrán considerarse una irregularidad de orden legal, pero no alcanzan relevancia constitucional, pues no se precisa ni se sugiere cuál pudiera ser el motivo de recusación que afecta a los Magistrados de intervención desconocida, ni se aportan datos que permitan acreditar prima facie causa legal alguna de recusación[47]".

En cambio, como decimos, el Tribunal Supremo, en algunas ocasiones, como por ejemplo, en la STS 228/1997 del 22 de marzo[48], se ha inclinado por

44 En palabras de LANGBROED, P.; FABRI, M.: *The Right Judge for Each Case. A study of case assignament and impartiality in six European judiciaries*, Oxford, 2007, pág. 17: "Las necesidades organizativas como la eficiencia y la flexibilidad no pueden aplicarse en detrimento de la independencia y la imparcialidad y obstruir la exigencia de que las sentencias han de cumplir con los estándares de calidad jurídica" (citado en JUAN SÁNCHEZ, R.: "La LO 7/2015: el Juez legal predeterminado, la gestión de los tribunales y su incidencia sobre el acceso a la justicia …", *op. cit*., p. 4).

45 STC de 6 de junio de 2016, [ROJ: STC 105/2016 - ECLI:ES:TC:2016:105].

46 STC de 15 de enero de 2001, [ROJ: STC 4/2001 - ECLI:ES:TC:2001:4.].

47 En el mismo sentido, entre otras, STC 177/2014 , de 3 de noviembre , FJ 4, [ROJ: STC 177/2014 - ECLI:ES:TC:2014:177], STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 2, [ROJ: STC 116/2006 - ECLI:ES:TC:2006:116], STC 97/2003, de 2 de junio, FJ 3, [ROJ: STC 97/2003 - ECLI:ES:TC:2003:97].

48 STS 228/1997, del 22 de marzo.

considerar que por efecto del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley es exigible en todo caso que las partes conozcan con anticipación los miembros que conocen las salas en caso de órganos colegiados, incluso en los casos de que sea necesario completar a estas con magistrados suplentes[49].

En cambio, en otras resoluciones del Tribunal Supremo, se puede comprobar, como trata el asunto de forma coincidente con el Constitucional. Y así, en los casos analizados y a los que hemos tenido acceso, exige que la infracción de las normas de reparto hayan tenido como consecuencia una indefensión material y un daño efectivo, como podría ser, el escenario que se concrete en la privación de la posibilidad de haber recusado a alguno de los miembros integrantes de la sala. Esto ha sido pronunciado, por ejemplo, en la STS 296/2000 del 28 de marzo, donde se afirma literalmente que: "…la doctrina de esta Sala ha estimado que los cambios de ponente carecen de la intensidad casacional suficiente para decretar la nulidad o reposición de las actuaciones practicadas en apelación…"[50].

C) Exclusión de la distribución de trabajo entre las salas o secciones de un mismo tribunal del contenido del derecho al juez legal predeterminado en la ley.

En principio, y siempre en principio, las reglas mediante las que se distribuye el trabajo entre las secciones de un mismo tribunal no se consideran incluidas en el derecho al juez legal.

Y así, el hecho de que sea asignado el asunto a una u otra sección de un tribunal no puede alegarse como vulnerador del derecho al juez legal. En tal sentido lo estableció ya el TC en su auto del 23 de julio de 1986, y lo ha reiterado recientemente en su sentencia de 27 de junio de 2022, cuando determina que "las normas de reparto de los asuntos entre diversos órganos judiciales de la misma jurisdicción y ámbito de competencia, [no afectan] al juez legal o predeterminado por la ley pues todos ellos gozan de la misma condición legal de juez ordinario (…), por lo que la interpretación y aplicación de las normas de reparto de asuntos es ajena al contenido constitucional del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y solo puede ser revisada en este tribunal en cuanto a su razonabilidad"[51].

49 Así lo ha expresado también, y entre otras, en STS 820/1992, del 5 de octubre.

50 En este mismo sentido, entre otras, SSTS 1113/1998 del 27 de noviembre, 838/1994 del 1 de octubre y la del 28 de febrero de 1991.

51 STC 83/2022, de 27 de junio de 2022 [ROJ: STC 83/2022 - ECLI:ES:TC:2022:83]. En la misma línea, STC 25/2022, de 23 de febrero de 2022 [ROJ: STC 25/2022 - ECLI:ES:TC:2022:25]; STC 37/2003, de 25 de febrero de 2003 [ROJ: STC 37/2003 - ECLI:ES:TC:2003:37]; STC 170/2000, de 26 de junio de 2000 [ROJ: STC 170/2000 - ECLI:ES:TC:2000:170].

Efectivamente, nuestro TC ya sostenía en su auto del 16 de enero de 1989[52] que «no puede equipararse la atribución de competencia a los diversos órganos judiciales, a la que afecta la predeterminación por ley formal ex art. 24.2 de la Constitución, con el reparto o distribución del trabajo entre las diversas Salas o Secciones de un mismo Tribunal, dotadas *ex lege* de la misma competencia material, que responde a exigencias o conveniencias de orden puramente interno y organizativo»[53].

Por tanto, como establece el TS, acogiendo, lógicamente, la doctrina del TC anteriormente expuesta, las reglas o normas de reparto relativas en este caso a la distribución entre los distintos órganos judiciales, salas y secciones, de entre los del mismo tipo, "constituyen reglas o criterios internos que, en los partidos judiciales y otras demarcaciones con varios órganos de la misma clase, se establecen con la finalidad de distribuir entre ellos el trabajo. Dichos órganos deben tener la misma competencia territorial, objetiva y funcional, y desde luego tales normas no sirven para establecer una competencia que inicialmente ya les corresponde, aunque sea con carácter provisional. Lógicamente, tales aspectos no tienen repercusión alguna en orden a la determinación de juez natural. En definitiva, cualquier infracción de las normas de reparto no tiene repercusión competencial" (STS 15 de marzo de 2022[54]).

---

52 ATC 13/1989, de 16 de enero.

53 Aparentemente, en sentido contrario a lo expuesto, la AN se ha manifestado se la siguiente manera: "Este derecho constitucional, que integra una de las garantías esenciales para la limpieza del procedimiento judicial, se desarrolla mediante la atribución legal de la competencia para la resolución del asunto a una determinada clase de tribunales, y posteriormente, cuando son varios los órganos judiciales a los que se atribuye esa competencia, mediante la aprobación de normas objetivas de reparto entre los diversos y tribunales y, dentro de ellos, entre los magistrados que los componen, asegurando así la distribución de los asuntos entre ellos con criterios objetivos, cuya aprobación corresponde a las Sala de Gobierno de los correspondientes Tribunales, como dispone el art. 152.1 de la LOPJ, que atribuye a estas Salas la competencia de aprobación de las normas de reparto de asuntos entre las distintas Secciones de cada Sala y el establecimiento anual con criterios objetivos los turnos precisos para la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones del Tribunal y de las Audiencias Provinciales del territorio, así como de modo vinculante las normas de asignación de las Ponencias que deban turnar los Magistrados; normas que tras su aprobación deben ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado para general conocimiento.
De ese modo, una vez ingresado un procedimiento en el tribunal al que se ha repartido mediante las normas aprobadas por la Sala de Gobierno, se produce el reparto interno entre los magistrados del tribunal correspondiente y se designa la composición de la Sala de Justicia que debe resolverlo, siguiendo los criterios objetivos aprobados anteriormente.
Y una vez realizada esa designación con criterios objetivos, con especificación del ponente y de la composición del resto de los miembros del Tribunal que deben resolverlo, es ese mismo tribunal designado el único competente para resolver el asunto, como culminación de la garantía constitucional del juez ordinario predeterminado por Ley" (AAN, Penal, sección 1 del 26 de septiembre de 2022 [ROJ: AAN 8952/2022 - ECLI:ES:AN:2022:8952ª].

54 STS 15 de marzo de 2022, [ROJ: STS 1024/2022 - ECLI:ES:TS:2022:1024].

Pues bien, la exclusión de esta posible manifestación del derecho al juez legal, es decir, la que podríamos denominar derecho al *juez-sala o sección*, pese a la inclusión de la anteriormente analizada, la del derecho al *juez-persona*, no es compartida, por no ser comprendida, por algunos autores. Entre ellos, CÓRDOBA CASTROVERDE ha llegado a afirmar que no cree "que se pueda negar la incidencia que una alteración interesada y sobrevenida en las normas de reparto pueda tener sobre la independencia judicial, y por lo tanto sobre la posible lesión de este derecho fundamental, sin que sea lícito descartar toda posible incidencia de las normas de reparto en este derecho fundamental basándose en que éstas persiguen fines meramente organizativos, pues toda norma de distribución de competencias lo persigue y, en todo caso, la manipulación de las normas internas de reparto con fines espurios puede incidir en la independencia del juez sin tener que llegar a demostrar su parcialidad".

Pese a lo anterior, el propio CÓRDOBA CASTROVERDE considera que sería comprensible tal distinción entre el derecho al juez-persona y el que hemos denominado derecho al *juez-sala o sección*, no ya por las consecuencias o finalidades de su quebrantamiento, sino por el propio soporte de las reglas de reparto, excluyendo la reserva de ley[55]. Así parece inferirse cuando razona que "la solución no pasaría tanto por excluir las normas de reparto de este derecho fundamental, sino por condicionar su viabilidad al cumplimiento de los requisitos y trámites previamente establecidos por una norma de rango legal, sin perjuicio de que su concreta modificación o alteración no requiera la intervención del legislador. Así, parece razonable exigir que tales normas se adopten pro futuro para los asuntos aún no ingresados, sin que en ningún caso afecten a los ya existentes, y en todo caso por el procedimiento y por el órgano marcado en la ley y con la suficiente publicidad. Éste es el criterio seguido por la LOPJ al exigir que las normas de reparto sean aprobadas por la Sala de Gobierno y que tengan la suficiente publicidad. Criterio que también se sigue en el artículo 17 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

55 *Vid*. FOSSAS ESPADALER, E.: *Legislador y derecho fundamental al juez legal*, *loc.cit*., pp. 24-25: "De esta forma, se niega "que las normas de reparto de los asuntos entre diversos órganos judiciales de la misma jurisdicción y ámbito de competencia, afecten al juez legal o predeterminado por la Ley pues todos ellos gozan de la misma condición legal de Juez ordinario" (STC 32/2004, de 8 de marzo, FJ 4). Esta jurisprudencia se ha interpretado en el sentido de que el Tribunal no excluye, en relación al reparto, un deber de predeterminación, pero sí la reserva de ley56, lo cual es discutible pues el Tribunal ha sido contundente al afirmar que "las cuestiones relativas a la competencia entre órganos judiciales son ajenas al contenido del derecho" (STC 171/1999, de 27 de diciembre, FJ 2). En todo caso, de los pronunciamientos reseñados se concluiría la inexistencia de una exigencia constitucional para el legislador en relación con el reparto de asuntos entre órganos de la misma competencia, ámbito material que quedaría excluido de la determinación exigida a aquél por el art. 24.2 CE".

completándose con la previsión de que las nuevas normas de reparto no afectan a los asuntos ya iniciados"[56].

E igualmente, en un sentido contrario a lo que parece haberse asentado por el TC, podemos leer a GÓMEZ COLOMER, cuando al referirse a las normas de reparto, afirma que, pese a no ser normas competenciales "caen competencialmente bajo los efectos del principio del juez legal del art. 24.2 CE."[57].

Pese a lo anterior y lo argüido por los autores anteriormente comentados, tal y como ya hemos anticipado al inicio de este apartado, el TC, con argumentos más o menos sólidos, nos parece concluyente: la interpretación y aplicación de las normas de reparto de asuntos entre salas o secciones de un mismo órgano judicial es ajena al contenido constitucional del derecho al juez legal y únicamente puede ser objeto de revisión ante el propio TC en cuanto a su razonabilidad.

4.- Breves consideraciones finales.

Para que se pueda predicar de un órgano judicial que sea respetuoso con la dimensión negativa del derecho al juez legal, se habrán de reconocer en los criterios de atribución de su potestad jurisdiccional notas inequívocas en cuanto anterioridad, generalidad, abstracción, objetividad, taxatividad y precisión. Siendo que todas ellas deben conducir a que el justiciable conozca previamente a la existencia de "su causa" cuál sería el órgano judicial que conocería de la misma. A diferencia del carácter previo de la norma, cuya esencia radica en la finalidad de eliminar las posibles injerencias provenientes del poder ejecutivo, y que en definitiva, desposean a un juez del conocimiento de lo inicialmente atribuido, la generalidad, la abstracción y la taxatividad tienen como finalidad que en la asignación no puedan aparecer jueces excepcionales o *ad hoc*.

56 CÓRDOBA CASTROVERDE, D.: "Algunas cuestiones relativas al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley", *en Cuadernos de Derecho público*, nº 10, 2000, pág. 93.

57 GÓMEZ COLOMER, J.L., Derecho Jurisdiccional, AAVV, 9ª ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 51. No podemos hacer abstracción del momento en el que se han pronunciado estos autores, tanto GÓMEZ COLOMER, como CÓRDOBA CASTROVERDE, debiendo contextualizar sus opiniones al ser comparadas con el parecer expresado por el TC.

En referencia a la predeterminación legal, en la que se concreta esencialmente la dimensión positiva del derecho al juez legal, cabe resaltar la naturaleza del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en cuanto derecho de configuración legal, sin olvidar su relación con el derecho de acceso a la jurisdicción, en cuanto derecho a formar parte en un proceso judicial y a obtener una resolución sobre el fondo del asunto dictada por el juez competente. De esta manera, ambas cuestiones convergen en el punto clave de determinar la existencia de límites o márgenes de libertad en lo que se refiere a esa configuración legal. Resultando que esos límites terminan proyectándose en tres dimensiones estrechamente ligadas entre sí; nos referimos a la legislativa, la judicial y la subjetiva, o referida a la titularidad del derecho de acceso a la justicia.

Por lo, *a priori,* confuso de la cuestión, no huelga incidir en que la creación previa del órgano jurisdiccional y del juez-persona estaría relacionada con el carácter "ordinario" del juez y la atribución normativa de la competencia y el reparto de los asuntos estarían relacionadas con el carácter "predeterminado" por la ley; no obstante, en cuanto a las normas de reparto, la jurisprudencia más reciente parece inclinarse por excluir las mismas del contenido al derecho al juez legal, ya que todos los jueces entre los que se distribuiría el asunto gozarían del mismo estatus en cuanto juez ordinario.

BIBLIOGRAFÍA

ASENCIO MELLADO, J. M.: *La Audiencia Nacional. Una visión crítica*, Fundación Alternativas, 29-2003, págs. 10-12.

BURGOS-LADRON DE GUEVARA, J.: *El juez ordinario predeterminado por la ley*, Civitas, Madrid, 1990.

CÓRDOBA CASTROVERDE, D.: "Algunas cuestiones relativas al derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley", *en Cuadernos de Derecho público*, nº 10, 2000.

DE DIEGO DÍEZ, L. A., *El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley*, Tecnos, 1998.

DE LA OLIVA SANTOS, A.: *Sobre el derecho a la tutela jurisdiccional. La persona ante la Administración de Justicia: derechos básicos,* Bosch, Barcelona, 1980.

DOIG DÍAZ, Y., *Jurisdicción Militar y Estado de Derecho Garantías constitucionales y organización judicial,* Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003.

ESCALADA LÓPEZ, M.L.: "Algunas reflexiones en torno a la jurisdicción militar", *Revista General de Derecho*, núm. 12, mayo 2007, Ref. Iustel §794490.

ESCALADA LÓPEZ, M.L.: Sobre el juez ordinario predeterminado por la ley, Valencia, Tirant lo Blanch, 2007.

FERNANDEZ-ESPINAR, G.: "La prevaricación judicial: de la teorización a su plasmación efectiva en la tipificación sustantiva", *Diario La Ley*, 1993.

FOSSAS ESPADALER, E.: *Legislador y derecho fundamental al juez legal*, Indret 2/2016, págs. 23 ss.

GARBERÍ LLOBREGAT, J.: "El derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley", en *Jurisdicción y competencia penal* (dir. MARTÍNEZ ARRIETA, A.), Cuadernos de derecho judicial, nº. 6, 1996, págs. 13-58.

GARBERÍ LLOBREGAT, J.: *El derecho a la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Bosch, Barcelona, 2008.

GIMENO SENDRA, V., en *Introducción al Derecho Procesal*, 6ª ed., Uned, Madrid, 2010.

GIMENO SENDRA, V.: *Introducción al Derecho Procesal*, 8ª ed, Colex, 2013.

GÓMEZ COLOMER, J.L., Derecho Jurisdiccional, AAVV, 9ª ed, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.

JUAN SÁNCHEZ, R.: "La LO 7/2015: el Juez legal predeterminado, la gestión de los tribunales y su incidencia sobre el acceso a la justicia. ¿La implantación encubierta de los Tribunales Provinciales de Instancia?", *Diario La Ley*, Nº 8656, Sección Doctrina, 1 de Diciembre de 2015, Ref. D-451, LA LEY 6763/2015.

LANGBROED, P.; FABRI, M.: *The Right Judge for Each Case. A study of case assignament and impartiality in six European judiciaries*, Oxford, 2007

LORCA NAVARRETE, A., *El juez constitucional*, Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2021.

MARTÍNEZ ARRIETA, A. (dir.), *Cuadernos de derecho judicial*, Nº. 6, 1996

MONTERO AROCA, J., en *Derecho Jurisdiccional I Parte General*, AAVV, 27ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019.

RIZO GÓMEZ, B.: "El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y la predeterminación de la competencia. Principios que deben inspirar toda reforma competencial del sistema judicial español", *Diario La Ley*, Nº 8372, Sección Doctrina, 8 de Septiembre de 2014, Año XXXV, Ref. D-271.

RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, J.: "El derecho al juez predeterminado por la ley", en *Derechos procesales fundamentales* de *Manuales de Formación Continuada* 22-2004 (GUTIÉRREZ-ALVIZ CONRADI, F.; LÓPEZ LÓPEZ, E., Coord.), Consejo General del Poder Judicial.

RUIZ RUIZ, G., *El derecho al juez ordinario en la Constitución Española*, Civitas, Madrid, 1991

RUIZ-RICO RUIZ, G. Y CARAZO LIÉBANA, M. J., *El derecho a la tutela judicial efectiva. Análisis jurisprudencial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.

SAAVEDRA GALLO, P.: "El derecho al juez natural", en *Nuevos horizontes del derecho procesal. Libro-homenaje al Prof. Ernesto Pedraz Penalva*, JIMENO BULNES, M.; PÉREZ GIL, J. (coords.), Bosch, Barcelona, 2016, (págs. 175-196).

SÁNCHEZ YLLERA, I: "Derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley", en *Comentarios a la Constitución española* (GÓMEZ DE LA ESCALERA C.R; CASAS BAAMONDE M.E.; RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M -dirs.-), Wolters Kluwer, Madrid, 2008.